

# Crónica del mes

Enero-febrero

El año 2004 se iba con variopintas noticias para los salvadoreños: un incremento en las estadísticas de homicidios y un nuevo aumento de muertes provocadas por accidentes de tránsito —con los mayores índices de Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud—; escasez de agua potable en varios municipios del área metropolitana de San Salvador y el interior del país y altos niveles de pobreza rural y suburbana; un nuevo fraude financiero —tras el desfalco de unos 8 millones de dólares por parte de la corredora de bolsa Operaciones Versátiles de Centroamérica (OBC)—; anomalías financieras en la administración de Enrique Molins, al frente de la organización deportiva COSSAL; la entrada en vigor de las reformas tributarias; grandes niveles de aceptación popular del gobierno de Elías Antonio Saca; nuevas desavenencias al interior del FMLN; y fallidos planes de reordenamiento en las municipalidades gobernadas por este último partido político.

En el plano internacional, la prensa salvadoreña destacaba que las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos continuaban con “normalidad”, luego de la reelección de George W. Bush como presidente de ese país; además, figuraba entre las notas de prensa una nueva oportunidad de Francisco Flores para presidir la OEA, luego de la desbandada del costarricense Miguel Ángel Rodríguez. El tsunami en el Océano Índico tampoco pasó desapercibido entre los periodistas salvadoreños.

El país iniciaba el 2005 en un marco de relativa estabilidad política, pero con importantes déficit sociales que cubrir y la necesidad de corregir los pobres resultados económicos obtenidos durante 2004. El economista Carlos Acevedo, del PNUD, hace una buena síntesis de lo anterior: “El Salvador

[...] ha ocupado la no muy honrosa penúltima posición en el ranking de crecimiento. El único país que ha tenido peor desempeño económico ha sido Haití. En cuanto a crecimiento de las exportaciones, El Salvador ocupa el último lugar [...] El hecho de que nuestro país, tras haber liderado durante la primera mitad de los noventa, haya pasado a disputarse con Haití el último puesto en el ranking de desempeño económico regional, no sólo ayuda a colocar en perspectiva el pobre legado económico de la administración Flores, sino que también augura un escenario bastante sombrío para el futuro cercano”.

Por otro lado, con el inicio del año se empieza a financiar el Fondo Solidario de la Salud (FOSALUD) y se incrementan los requisitos para adquirir vivienda con el Fondo Social para la Vivienda. Asimismo, pese al madrugón de la Asamblea Legislativa salvadoreña por aprobar el TLC con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), todavía se presenta pendiente la ratificación del mismo por parte del Congreso estadounidense.

En el ámbito político y social, el entusiasmo inicial con que diera inicio la gestión presidencial de Antonio Saca dio paso a mayores dosis de escepticismo entre los salvadoreños, ante la tardanza de los prometidos logros sociales y económicos, y un triste retorno al ambiente de escaso entendimiento político que caracterizó a la gestión de Francisco Flores. La cuestión no resultó ser tan fácil ni automática como parecía. Aún así, ha sido obvio que el pésimo desempeño de los políticos y de la política a lo largo de 2004 no ha sido suficiente como para que los salvadoreños le exijan al gobierno un salto cualitativo en sus labores. El mandatario salió bien librado de las evaluaciones que se realizaron al fi-

nal del año y, en su mayoría, la población no culpa ni a Saca ni a su gobierno de los pésimos resultados económicos y del estado de inseguridad que campea en el país. Por el contrario, para muchos, parte de la culpa de los males que aquejan a la población llevan nombre y apellido: FMLN.

Gran parte de la población —informada a medias por las grandes empresas de comunicación y desinformada por la agresiva campaña de Casa Presidencial y algunos funcionarios radicales encargados de hacer el “trabajo sucio”— opina que la intransigencia del FMLN en oponerse a las iniciativas del Poder Ejecutivo frenan el desarrollo del país. Más aún, sugieren algunos de esos funcionarios gubernamentales, que el partido de izquierda estaría detrás de muchos síntomas de inestabilidad y violencia registrados desde el cierre de 2004.

Contrario a los niveles de aceptación obtenidos por Saca y su partido, el FMLN todavía no se ha desprendido del aura de divisionismo e intransigencia que le rodea desde que se conocieron los resultados electorales de marzo. En este escenario desfavorable para la izquierda, la labor municipal desarrollada por los alcaldes efemelenistas ha sido menguada por la marejada de críticas y señalamientos de la derecha y sus aliados. Por si fuera poco, las administraciones municipales a cargo del FMLN no han sabido controlar con suficiente tino e inteligencia las situaciones conflictivas que enfrentan con dos grupos bastante agresivos dentro de la sociedad salvadoreña: los vendedores informales y los sindicalistas municipales, a quienes se les unirían los comerciantes de los mercados, para conformar una “unión en contra de la Alcaldía”.

A guisa de ejemplo, sólo durante el mes de enero se registraron tres protestas masivas en contra de la municipalidad capitalina. La primera se registró el día 11, cuando vendedores del mercado central y miembros de la sindical ASTRAM protagonizaron dos movilizaciones paralelas en contra de la alcaldía capitalina, demandando reducción de las tasas municipales y el reinstalo de tres dirigentes sindicales despedidos, respectivamente. Tales acciones se dieron en paralelo con la campaña declarada del partido oficial por recuperar el poder municipal de San Salvador. Así, dos días después, el 13 de enero, el diputado de ARENA, Norman Quijano, crítico acérrimo de las sucesivas administraciones municipales de San Salvador, divulgó públicamente sus intenciones de convertirse en candidato por su partido para disputarse la silla

edilicia en 2006. “Tengo la intención de pelear por la candidatura”, comentó el legislador arenero a la prensa.

El legislador no fue el único en mostrar su interés por puestos de poder en disputa. El 18, el partido ARENA abrió las puertas a la inscripción de candidatos para disputarse las 262 alcaldías del país, mientras la prensa empezó a barajar posibles candidatos en diferentes sitios del territorio nacional. Ese mismo día, miembros de ASTRAM y AGEPIN volvieron a congregarse frente a las instalaciones de la alcaldía municipal capitalina, sin obtener respuesta a sus demandas laborales. “Para qué los vamos a recibir si ya hay una mesa laboral instalada”, justificó el alcalde municipal, Carlos Rivas Zamora. El 27, se registró una nueva marcha de vendedores informales, de los mercados y empleados municipales, sumándose a las acciones de protesta registradas durante el mes sin que los mediadores, como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), pudieran contribuir en una mesa de diálogo infructífera.

El tema de las disputas entre autoridades municipales y diversos sectores de la sociedad afectó a muchos salvadoreños, pero ha sido la violencia social y otros temas de seguridad pública lo que más ha mantenido en vilo a cientos de salvadoreños. Al respecto, debido al incremento de homicidios experimentado desde finales de 2004, las autoridades gubernamentales tuvieron que ceder en algunos puntos de honor, como por ejemplo, el hecho de que la mayoría de asesinatos es atribuible a la violencia social y no a las pandillas, como se sostuvo desde la gestión de Francisco Flores.

Las críticas a los planes gubernamentales se dejaron escuchar desde los primeros días del año. Así, el 2 de enero, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, arremetía en contra de los planes de seguridad implementados desde la administración de Flores: “Hay una contradicción. Por una parte dice el gobierno que fue efectivo el plan Supermano dura y por otras las estadísticas oficiales muestran que hay más homicidios este año que en años anteriores. Eso quiere decir que fracasó el plan. Porque el enfoque básico era incorrecto”, dijo el prelado católico en conferencia de prensa.

Dos días después, el 4, *La Prensa Gráfica* reveló que las cifras de homicidios registrados durante 2004 aumentaron en un 27 por ciento, respecto de 2003, pese a la aplicación del plan Súper

Mano Dura. La Policía contabilizó un total de 2,756 crímenes en todo el país; la tasa de homicidios alcanzó los 41 por cada 100 mil habitantes, mientras el año anterior ascendía a 34 por cada 100 mil salvadoreños. Tales cifras se anunciaban desde finales del año: sólo entre el 23 y el 31 de diciembre de 2004, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 85 homicidios en todo el país. El primer día del año, por ejemplo, presagiaba un tendencia nefasta: entre la 1 p.m. del 31 de diciembre y las 6 p.m. del 1 de enero se produjeron 15 asesinatos, de acuerdo al Comité de Emergencia Nacional.

El 5, el presidente Antonio Saca se comprometió ante la prensa con presentar una propuesta al Poder Legislativo, a fin de restringir el control de armas en el país, debido a los índices de violencia y, en particular, de homicidios. "Vivimos en una sociedad violenta y hay que reconocerlo y para superar esta etapa de posguerra, debemos tomar medidas como hacer más difícil la adquisición de armas", comentó el mandatario. Por su parte, el director de la Policía, Ricardo Meneses, prometió que la corporación policial mejoraría la parte de inteligencia para investigar los crímenes.

Las mismas autoridades gubernamentales se encargaron de vincular el tema de la violencia social con la tensa situación que se viviría en casi todos los penales salvadoreños. El 17 de enero, unos 20 reos del penal de Sonsonate iniciaron una huelga de hambre, pidiendo la destitución del director de ese centro, Ricardo Ramos, por supuestos malos tratos. Ramos, ante la visita de la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, alegó que no podía ignorar el reglamento interno de los penales, mismo que prohíbe a los reos ciertas prerrogativas como poseer aparatos electrodomésticos. La medida adoptada por los reclusos en el occidente del país sólo sería el principio.

El día 20, *La Prensa Gráfica* reveló, citando fuentes de la Policía, que este cuerpo no tenía acceso a la base de datos del Ministerio de Defensa sobre la posesión de armas, lo cual se añade a los obstáculos que el cuerpo policial enfrenta para frenar la ola de asesinatos. Según la fuente consultada, la negativa de Defensa responde a "razones de seguridad nacional". En una nota paralela, el director de la Policía reconoció las dificultades técnicas y científicas del laboratorio de la institución encargado de la investigación del delito. En paralelo, el ministro de Gobernación, René Figueroa, aseguraba que la ley no establecía claramente si la PNC

podía tener acceso a esos registros; sin embargo, el mismo rotativo descubrió que la Ley de Control de Armas aprobada por los diputados en julio de 2002 establecía claramente, en por lo menos tres artículos, que el Ministerio de Defensa deberá trasladar la información pertinente a la Policía para que ésta cumpla con sus responsabilidades. Para culminar el mes, el día 28, Figueroa entregó al congreso un paquete de enmiendas a la Ley de Armas, con el objetivo fundamental de bajar los índices de homicidios registrados en las últimas semanas mediante una mayor restricción para quienes deseen registrar legalmente sus armas.

Por otro lado, el sistema de partidos también registró gran actividad, durante ambos meses, no siempre favorable para el interés general. El 6, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitía una resolución por medio de la cual salvaba a los partidos PCN y PDC, luego que el mismo Código Electoral mandara que desaparecieran debido a que no alcanzaron el porcentaje mínimo en la pasada elección presidencial del 21 de marzo. Los magistrados del TSE que votaron a favor de la resolución se habrían amparado en la Constitución, que garantiza el pluralismo político. En el fallo se lee que la eliminación de ambos partidos "atenta contra el pluralismo político y pone en grave riesgo el único mecanismo con el que cuenta el pueblo salvadoreño para ser representado". Pero el voto fue dividido. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el TSE, Eduardo Urquilla, comentó que "la resolución violenta el orden del TSE, ya que éste se rehúsa a cumplir con su deber".

El 15, unos 500 militantes y la dirección del FMLN se congregaron en la Plaza del Cristo de la paz, en San Salvador, para conmemorar el aniversario número trece de la firma de los acuerdos de paz. "Hacemos un llamado al presidente de la República para dialogar y concertar como se debe", dijo el coordinador del partido de izquierda, Medardo González. Una semana después se volverían a reunir, esta vez en la plaza Gerardo Barrios, de San Salvador, para lanzar la campaña política que, según dijeron, hará "que la gente conozca la verdad" sobre el gobierno de Saca. La misma se realizaría hasta antes de las elecciones del año próximo. "Estas son campañas sucias para golpear a un gobierno exitoso, cercano a la gente, y que ha cumplido casi todas las promesas", comentó el presidente Saca como respuesta al evento. Días después, el 27, la prensa anunció la desbandada de unos 500 mili-

nal del año y, en su mayoría, la población no culpa ni a Saca ni a su gobierno de los pésimos resultados económicos y del estado de inseguridad que campea en el país. Por el contrario, para muchos, parte de la culpa de los males que aquejan a la población llevan nombre y apellido: FMLN.

Gran parte de la población —informada a medias por las grandes empresas de comunicación y desinformada por la agresiva campaña de Casa Presidencial y algunos funcionarios radicales encargados de hacer el “trabajo sucio”— opina que la intransigencia del FMLN en oponerse a las iniciativas del Poder Ejecutivo frenan el desarrollo del país. Más aún, sugieren algunos de esos funcionarios gubernamentales, que el partido de izquierda estaría detrás de muchos síntomas de inestabilidad y violencia registrados desde el cierre de 2004.

Contrario a los niveles de aceptación obtenidos por Saca y su partido, el FMLN todavía no se ha desprendido del aura de divisionismo e intransigencia que le rodea desde que se conocieran los resultados electorales de marzo. En este escenario desfavorable para la izquierda, la labor municipal desarrollada por los alcaldes efemelenistas ha sido menguada por la marejada de críticas y señalamientos de la derecha y sus aliados. Por si fuera poco, las administraciones municipales a cargo del FMLN no han sabido controlar con suficiente tino e inteligencia las situaciones conflictivas que enfrentan con dos grupos bastante agresivos dentro de la sociedad salvadoreña: los vendedores informales y los sindicalistas municipales, a quienes se les unirían los comerciantes de los mercados, para conformar una “unión en contra de la Alcaldía”.

A guisa de ejemplo, sólo durante el mes de enero se registraron tres protestas masivas en contra de la municipalidad capitalina. La primera se registró el día 11, cuando vendedores del mercado central y miembros de la sindical ASTRAM protagonizaron dos movilizaciones paralelas en contra de la alcaldía capitalina, demandando reducción de las tasas municipales y el reinstalo de tres dirigentes sindicales despedidos, respectivamente. Tales acciones se dieron en paralelo con la campaña declarada del partido oficial por recuperar el poder municipal de San Salvador. Así, dos días después, el 13 de enero, el diputado de ARENA, Norman Quijano, crítico acérrimo de las sucesivas administraciones municipales de San Salvador, divulgó públicamente sus intenciones de convertirse en candidato por su partido para disputarse la silla

edilicia en 2006. “Tengo la intención de pelear por la candidatura”, comentó el legislador arenero a la prensa.

El legislador no fue el único en mostrar su interés por puestos de poder en disputa. El 18, el partido ARENA abrió las puertas a la inscripción de candidatos para disputarse las 262 alcaldías del país, mientras la prensa empezó a barajar posibles candidatos en diferentes sitios del territorio nacional. Ese mismo día, miembros de ASTRAM y AGEPYN volvieron a congregarse frente a las instalaciones de la alcaldía municipal capitalina, sin obtener respuesta a sus demandas laborales. “Para qué los vamos a recibir si ya hay una mesa laboral instalada”, justificó el alcalde municipal, Carlos Rivas Zamora. El 27, se registró una nueva marcha de vendedores informales, de los mercados y empleados municipales, sumándose a las acciones de protesta registradas durante el mes sin que los mediadores, como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), pudieran contribuir en una mesa de diálogo infructífera.

El tema de las disputas entre autoridades municipales y diversos sectores de la sociedad afectó a muchos salvadoreños, pero ha sido la violencia social y otros temas de seguridad pública lo que más ha mantenido en vilo a cientos de salvadoreños. Al respecto, debido al incremento de homicidios experimentado desde finales de 2004, las autoridades gubernamentales tuvieron que ceder en algunos puntos de honor, como por ejemplo, el hecho de que la mayoría de asesinatos es atribuible a la violencia social y no a las pandillas, como se sostuvo desde la gestión de Francisco Flores.

Las críticas a los planes gubernamentales se dejaron escuchar desde los primeros días del año. Así, el 2 de enero, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, arremetía en contra de los planes de seguridad implementados desde la administración de Flores: “Hay una contradicción. Por una parte dice el gobierno que fue efectivo el plan Supermano dura y por otras las estadísticas oficiales muestran que hay más homicidios este año que en años anteriores. Eso quiere decir que fracasó el plan. Porque el enfoque básico era incorrecto”, dijo el prelado católico en conferencia de prensa.

Dos días después, el 4, *La Prensa Gráfica* reveló que las cifras de homicidios registrados durante 2004 aumentaron en un 27 por ciento, respecto de 2003, pese a la aplicación del plan Súper

Mano Dura. La Policía contabilizó un total de 2,756 crímenes en todo el país; la tasa de homicidios alcanzó los 41 por cada 100 mil habitantes, mientras el año anterior ascendía a 34 por cada 100 mil salvadoreños. Tales cifras se anunciaban desde finales del año: sólo entre el 23 y el 31 de diciembre de 2004, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 85 homicidios en todo el país. El primer día del año, por ejemplo, presagiaba un tendencia nefasta: entre la 1 p.m. del 31 de diciembre y las 6 p.m. del 1 de enero se produjeron 15 asesinatos, de acuerdo al Comité de Emergencia Nacional.

El 5, el presidente Antonio Saca se comprometió ante la prensa con presentar una propuesta al Poder Legislativo, a fin de restringir el control de armas en el país, debido a los índices de violencia y, en particular, de homicidios. "Vivimos en una sociedad violenta y hay que reconocerlo y para superar esta etapa de posguerra, debemos tomar medidas como hacer más difícil la adquisición de armas", comentó el mandatario. Por su parte, el director de la Policía, Ricardo Meneses, prometió que la corporación policial mejoraría la parte de inteligencia para investigar los crímenes.

Las mismas autoridades gubernamentales se encargaron de vincular el tema de la violencia social con la tensa situación que se viviría en casi todos los penales salvadoreños. El 17 de enero, unos 20 reos del penal de Sonsonate iniciaron una huelga de hambre, pidiendo la destitución del director de ese centro, Ricardo Ramos, por supuestos malos tratos. Ramos, ante la visita de la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, alegó que no podía ignorar el reglamento interno de los penales, mismo que prohíbe a los reos ciertas prerrogativas como poseer aparatos electrodomésticos. La medida adoptada por los reclusos en el occidente del país sólo sería el principio.

El día 20, *La Prensa Gráfica* reveló, citando fuentes de la Policía, que este cuerpo no tenía acceso a la base de datos del Ministerio de Defensa sobre la posesión de armas, lo cual se añade a los obstáculos que el cuerpo policial enfrenta para frenar la ola de asesinatos. Según la fuente consultada, la negativa de Defensa responde a "razones de seguridad nacional". En una nota paralela, el director de la Policía reconoció las dificultades técnicas y científicas del laboratorio de la institución encargado de la investigación del delito. En paralelo, el ministro de Gobernación, René Figueroa, aseguraba que la ley no establecía claramente ni la PNC

podía tener acceso a esos registros; sin embargo, el mismo rotativo descubrió que la Ley de Control de Armas aprobada por los diputados en julio de 2002 establecía claramente, en por lo menos tres artículos, que el Ministerio de Defensa deberá trasladar la información pertinente a la Policía para que ésta cumpla con sus responsabilidades. Para culminar el mes, el día 28, Figueroa entregó al congreso un paquete de enmiendas a la Ley de Armas, con el objetivo fundamental de bajar los índices de homicidios registrados en las últimas semanas mediante una mayor restricción para quienes deseen registrar legalmente sus armas.

Por otro lado, el sistema de partidos también registró gran actividad, durante ambos meses, no siempre favorable para el interés general. El 6, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitía una resolución por medio de la cual salvaba a los partidos PCN y PDC, luego que el mismo Código Electoral mandara que desaparecieran debido a que no alcanzaron el porcentaje mínimo en la pasada elección presidencial del 21 de marzo. Los magistrados del TSE que votaron a favor de la resolución se habrían amparado en la Constitución, que garantiza el pluralismo político. En el fallo se lee que la eliminación de ambos partidos "atenta contra el pluralismo político y pone en grave riesgo el único mecanismo con el que cuenta el pueblo salvadoreño para ser representado". Pero el voto fue dividido. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el TSE, Eduardo Urquilla, comentó que "la resolución violenta el orden del TSE, ya que éste se rehúsa a cumplir con su deber".

El 15, unos 500 militantes y la dirección del FMLN se congregaron en la Plaza del Cristo de la paz, en San Salvador, para conmemorar el aniversario número trece de la firma de los acuerdos de paz. "Hacemos un llamado al presidente de la República para dialogar y concertar como se debe", dijo el coordinador del partido de izquierda, Medardo González. Una semana después se volverían a reunir, esta vez en la plaza Gerardo Barrios, de San Salvador, para lanzar la campaña política que, según dijeron, hará "que la gente conozca la verdad" sobre el gobierno de Saca. La misma se realizaría hasta antes de las elecciones del año próximo. "Estas son campañas sucias para golpear a un gobierno exitoso, cercano a la gente, y que ha cumplido casi todas las promesas", comentó el presidente Saca como respuesta al evento. Días después, el 27, la prensa anunció la desbandada de unos 500 mili-

nal del año y, en su mayoría, la población no culpa ni a Saca ni a su gobierno de los pésimos resultados económicos y del estado de inseguridad que campea en el país. Por el contrario, para muchos, parte de la culpa de los males que aquejan a la población llevan nombre y apellido: FMLN.

Gran parte de la población —informada a medias por las grandes empresas de comunicación y desinformada por la agresiva campaña de Casa Presidencial y algunos funcionarios radicales encargados de hacer el “trabajo sucio”— opina que la intransigencia del FMLN en oponerse a las iniciativas del Poder Ejecutivo frenan el desarrollo del país. Más aún, sugieren algunos de esos funcionarios gubernamentales, que el partido de izquierda estaría detrás de muchos síntomas de inestabilidad y violencia registrados desde el cierre de 2004.

Contrario a los niveles de aceptación obtenidos por Saca y su partido, el FMLN todavía no se ha desprendido del aura de divisionismo e intransigencia que le rodea desde que se conocieran los resultados electorales de marzo. En este escenario desfavorable para la izquierda, la labor municipal desarrollada por los alcaldes efemelenistas ha sido menguada por la marejada de críticas y señalamientos de la derecha y sus aliados. Por si fuera poco, las administraciones municipales a cargo del FMLN no han sabido controlar con suficiente tino e inteligencia las situaciones conflictivas que enfrentan con dos grupos bastante agresivos dentro de la sociedad salvadoreña: los vendedores informales y los sindicalistas municipales, a quienes se les unirían los comerciantes de los mercados, para conformar una “unión en contra de la Alcaldía”.

A guisa de ejemplo, sólo durante el mes de enero se registraron tres protestas masivas en contra de la municipalidad capitalina. La primera se registró el día 11, cuando vendedores del mercado central y miembros de la sindical ASTRAM protagonizaron dos movilizaciones paralelas en contra de la alcaldía capitalina, demandando reducción de las tasas municipales y el reinstalo de tres dirigentes sindicales despedidos, respectivamente. Tales acciones se dieron en paralelo con la campaña declarada del partido oficial por recuperar el poder municipal de San Salvador. Así, dos días después, el 13 de enero, el diputado de ARENA, Norman Quijano, crítico acérrimo de las sucesivas administraciones municipales de San Salvador, divulgó públicamente sus intenciones de convertirse en candidato por su partido para disputarse la silla

edilicia en 2006. “Tengo la intención de pelear por la candidatura”, comentó el legislador arenero a la prensa.

El legislador no fue el único en mostrar su interés por puestos de poder en disputa. El 18, el partido ARENA abrió las puertas a la inscripción de candidatos para disputarse las 262 alcaldías del país, mientras la prensa empezó a barajar posibles candidatos en diferentes sitios del territorio nacional. Ese mismo día, miembros de ASTRAM y AGEPYN volvieron a congregarse frente a las instalaciones de la alcaldía municipal capitalina, sin obtener respuesta a sus demandas laborales. “Para qué los vamos a recibir si ya hay una mesa laboral instalada”, justificó el alcalde municipal, Carlos Rivas Zamora. El 27, se registró una nueva marcha de vendedores informales, de los mercados y empleados municipales, sumándose a las acciones de protesta registradas durante el mes sin que los mediadores, como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), pudieran contribuir en una mesa de diálogo infructífera.

El tema de las disputas entre autoridades municipales y diversos sectores de la sociedad afectó a muchos salvadoreños, pero ha sido la violencia social y otros temas de seguridad pública lo que más ha mantenido en vilo a cientos de salvadoreños. Al respecto, debido al incremento de homicidios experimentado desde finales de 2004, las autoridades gubernamentales tuvieron que ceder en algunos puntos de honor, como por ejemplo, el hecho de que la mayoría de asesinatos es atribuible a la violencia social y no a las pandillas, como se sostuvo desde la gestión de Francisco Flores.

Las críticas a los planes gubernamentales se dejaron escuchar desde los primeros días del año. Así, el 2 de enero, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, arremetía en contra de los planes de seguridad implementados desde la administración de Flores: “Hay una contradicción. Por una parte dice el gobierno que fue efectivo el plan Supermano dura y por otras las estadísticas oficiales muestran que hay más homicidios este año que en años anteriores. Eso quiere decir que fracasó el plan. Porque el enfoque básico era incorrecto”, dijo el prelado católico en conferencia de prensa.

Dos días después, el 4, *La Prensa Gráfica* reveló que las cifras de homicidios registrados durante 2004 aumentaron en un 27 por ciento, respecto de 2003, pese a la aplicación del plan Súper

Mano Dura. La Policía contabilizó un total de 2,756 crímenes en todo el país; la tasa de homicidios alcanzó los 41 por cada 100 mil habitantes, mientras el año anterior ascendía a 34 por cada 100 mil salvadoreños. Tales cifras se anunciaban desde finales del año: sólo entre el 23 y el 31 de diciembre de 2004, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 85 homicidios en todo el país. El primer día del año, por ejemplo, presagiaba una tendencia nefasta: entre la 1 p.m. del 31 de diciembre y las 6 p.m. del 1 de enero se produjeron 15 asesinatos, de acuerdo al Comité de Emergencia Nacional.

El 5, el presidente Antonio Saca se comprometió ante la prensa con presentar una propuesta al Poder Legislativo, a fin de restringir el control de armas en el país, debido a los índices de violencia y, en particular, de homicidios. "Vivimos en una sociedad violenta y hay que reconocerlo y para superar esta etapa de posguerra, debemos tomar medidas como hacer más difícil la adquisición de armas", comentó el mandatario. Por su parte, el director de la Policía, Ricardo Meneses, prometió que la corporación policial mejoraría la parte de inteligencia para investigar los crímenes.

Las mismas autoridades gubernamentales se encargaron de vincular el tema de la violencia social con la tensa situación que se viviría en casi todos los penales salvadoreños. El 17 de enero, unos 20 reos del penal de Sonsonate iniciaron una huelga de hambre, pidiendo la destitución del director de ese centro, Ricardo Ramos, por supuestos malos tratos. Ramos, ante la visita de la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, alegó que no podía ignorar el reglamento interno de los penales, mismo que prohíbe a los reos ciertas prerrogativas como poseer aparatos electrodomésticos. La medida adoptada por los reclusos en el occidente del país sólo sería el principio.

El día 20, *La Prensa Gráfica* reveló, citando fuentes de la Policía, que este cuerpo no tenía acceso a la base de datos del Ministerio de Defensa sobre la posesión de armas, lo cual se añade a los obstáculos que el cuerpo policial enfrenta para frenar la ola de asesinatos. Según la fuente consultada, la negativa de Defensa responde a "razones de seguridad nacional". En una nota paralela, el director de la Policía reconoció las dificultades técnicas y científicas del laboratorio de la institución encargado de la investigación del delito. En paralelo, el ministro de Gobernación, René Figueroa, aseguraba que la ley no establecía claramente si la PNC

podía tener acceso a esos registros; sin embargo, el mismo rotativo descubrió que la Ley de Control de Armas aprobada por los diputados en julio de 2002 establecía claramente, en por lo menos tres artículos, que el Ministerio de Defensa deberá trasladar la información pertinente a la Policía para que ésta cumpla con sus responsabilidades. Para culminar el mes, el día 28, Figueroa entregó al congreso un paquete de enmiendas a la Ley de Armas, con el objetivo fundamental de bajar los índices de homicidios registrados en las últimas semanas mediante una mayor restricción para quienes deseen registrar legalmente sus armas.

Por otro lado, el sistema de partidos también registró gran actividad, durante ambos meses, no siempre favorable para el interés general. El 6, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitía una resolución por medio de la cual salvaba a los partidos PCN y PDC, luego que el mismo Código Electoral mandara que desaparecieran debido a que no alcanzaron el porcentaje mínimo en la pasada elección presidencial del 21 de marzo. Los magistrados del TSE que votaron a favor de la resolución se habrían amparado en la Constitución, que garantiza el pluralismo político. En el fallo se lee que la eliminación de ambos partidos "atenta contra el pluralismo político y pone en grave riesgo el único mecanismo con el que cuenta el pueblo salvadoreño para ser representado". Pero el voto fue dividido. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el TSE, Eduardo Urquilla, comentó que "la resolución violenta el orden del TSE, ya que éste se rehúsa a cumplir con su deber".

El 15, unos 500 militantes y la dirección del FMLN se congregaron en la Plaza del Cristo de la paz, en San Salvador, para conmemorar el aniversario número trece de la firma de los acuerdos de paz. "Hacemos un llamado al presidente de la República para dialogar y concertar como se debe", dijo el coordinador del partido de izquierda, Medardo González. Una semana después se volverían a reunir, esta vez en la plaza Gerardo Barrios, de San Salvador, para lanzar la campaña política que, según dijeron, hará "que la gente conozca la verdad" sobre el gobierno de Saca. La misma se realizaría hasta antes de las elecciones del año próximo. "Estas son campañas sucias para golpear a un gobierno exitoso, cercano a la gente, y que ha cumplido casi todas las promesas", comentó el presidente Saca como respuesta al evento. Días después, el 27, la prensa anunció la desbandada de unos 500 mili-

tantes del FMLN de Sonsonate, quienes se afiliaban al CDU, debido a diferencias con la dirigencia del partido. "Ya nos cansamos de que no nos tomen en cuenta, es demasiado. No es el partido, son los dirigentes", comentó Cristina García, dirigente histórica del FMLN.

En lo tocante a la economía, destacó el largo y tedioso camino que llevó a la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación para 2005, además de la entrada en vigor de la reforma tributaria y las gestiones oficiales por cerrar el CAFTA y obtener una nueva prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas inglesas) para los salvadoreños que laboran sin documentos en regla en los Estados Unidos. El primero de estos asuntos fue el que más ocupó espacios entre la prensa nacional. Así, el día 3, los medios informativos revelaban que el gobierno de El Salvador, ante la no aprobación de 541 millones de dólares en bonos y 2,292 millones para financiar los gastos estatales, decidió adquirir una deuda de corto plazo, mediante la emisión de letras del tesoro, por 75 millones de dólares. La fuente periodística reveló, además, que, según datos del Ministerio de Hacienda, 2005 será el año con más endeudamiento externo y el próximo cuando mayor proporción del presupuesto general de la nación se destine a pagarlo.

El 6, la fracción legislativa del FMLN sugirió al gobierno salvadoreño que modificara el diseño del presupuesto general de la Nación, a fin de que se eliminara la emisión de bonos, condicionando su apoyo parlamentario a esa sugerencia. "Nosotros creemos que el Ejecutivo debería comenzar a reestructurar el presupuesto de tal forma que se presente otro proyecto", dijo el diputado efemelecionista Humberto Centeno. Inmediatamente, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, rechazó la propuesta de la fracción de izquierda.

Ese mismo día, el FMLN también emitió un comunicado público en el que hacía un llamado al presidente Saca respecto de la necesidad de ser responsables en la política de endeudamiento. El partido de izquierda propuso una política de ahorro de recursos y de elevación de los ingresos y un acuerdo sobre los nuevos flujos de inversión, que diera prioridad a la reforma del sistema de salud, un incremento de la inversión en educación, atención al problema del agua potable, subsidio al transporte público para estudiantes, mayores de edad; además, el mejoramiento de las pensiones y

incentivos salariales para los trabajadores que devengan menos de 500 dólares mensuales.

Según cálculos de la Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario (UASP), de la Asamblea Legislativa, de aprobarse el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo para 2005, la deuda pública ascendería a 7,375.8 millones de dólares, cifra equivalente al 47 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ese mismo 6 de enero, ante una petición oficial del gobierno salvadoreño, el director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios de los Estados Unidos, Eduardo Aguirre, anunció una nueva prórroga del TPS, que da cobijo legal a miles de salvadoreños indocumentados que laboran en ese país. Simultáneamente, la directiva de la Asamblea Legislativa enviaba al Ejecutivo el decreto mediante el cual ratifica el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, para que el presidente de la República emitiera su aval definitivo y quedar únicamente en espera a que el Congreso norteamericano también lo ratifique.

El día 10, el presidente Saca reveló que la práctica de financiar el presupuesto contrayendo deuda por medio de la emisión de bonos seguiría hasta el año 2020, al menos. "Le he propuesto al FMLN que hagamos una proyección de 15 años del endeudamiento y que vayamos midiendo año con año qué tanto nos endeudamos y qué tanto disminuimos la deuda quinquenalmente", aseguró el mandatario. Hasta ese día, recoge un matutino nacional, tanto el ministro de Hacienda, López Suárez, como la fracción del FMLN se acusaban de ser interlocutores sin plena capacidad de decisión.

El 11, mientras el Ministerio de Hacienda realizaba jornadas de instrucción para que pequeños, medianos y grandes contribuyentes aplicaran la reforma tributaria, decenas de usuarios manifestaron su desconocimiento respecto de la misma. Paralelamente, el gobierno advirtió que los precios de los productos y servicios no deberían incrementarse como consecuencia de la aplicación de las reformas. Un día después, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador emitió un comunicado público en el que sostiene que, ante los reclamos y denuncias de muchos de sus miembros respecto de la aplicación de algunas medidas contempladas en la reforma fiscal, exhorta al gobierno de la República sobre "la necesidad de evaluar y corregir los impactos y adoptar las medidas pertinentes para disponer a la brevedad del Reglamento Guía de Aplicación de

las Reformas que brinden certeza en los procedimientos y que a la vez eximan a los Contribuyentes del riesgo de la fragilidad de las respuestas verbales que dan pauta a la discrecionalidad”.

El 13 de enero, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que el país registró, en 2004, “un récord histórico en el ingreso por remesas familiares, al totalizar 2,547.6 millones de dólares”. Las remesas, detalló la fuente, “crecieron 21 por ciento con respecto al ingreso por este concepto del año anterior”, llegando a representar el 16.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El banco explicó que “el crecimiento en las remesas familiares es producto de la expansión económica y de la reducción del desempleo hispano en los Estados Unidos, principal fuente de remesas del país”. La economía norteamericana registró un crecimiento económico trimestral promedio de 3.9 por ciento hasta septiembre de 2004, y el desempleo hispano descendió de 7.3 por ciento en enero a 6.6 por ciento en diciembre de 2004. Ambos resultados —concluye la fuente— permitieron mejorar los ingresos de los salvadoreños que residen en ese país y, por lo tanto, les permitió enviar más ayuda a sus familiares”. Finalmente, el BCR sostuvo que “la reciente aprobación de la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes salvadoreños ilegales en Estados Unidos es un elemento que brindará estabilidad al comportamiento de las remesas en el 2005”.

Ese mismo día, el BCR también informó que “El Salvador exportó 3,295.3 millones de dólares en 2004, creciendo 5.3 por ciento con relación al año anterior, como resultado del incremento de las exportaciones de café y de bienes no tradicionales”. Dentro de los productos tradicionales, “las exportaciones de café, que fueron de 123.4 millones de dólares a diciembre de 2004, se incrementaron en 17 millones de dólares, como resultado del incremento del precio del grano en el mercado internacional (16.3 por ciento) y del volumen exportado (0.6 por ciento). Por su parte, precisa la fuente, “los productos no tradicionales apoyaron la tasa de crecimiento de las exportaciones, y totalizaron 1,309 millones de dólares, experimentando un crecimiento de 19.9 por ciento anual”. Además, las importaciones totalizaron 6,268.8 millones de dólares, creciendo 8.9 por ciento con relación al año anterior.

El 18, el presidente Saca aseguró que las 262 alcaldías del país no recibirían un aumento pacta-

do de 19.5 millones de dólares el presente año, debido a que no se había aprobado aún el Presupuesto. Con el aumento, las municipalidades recibirían el 7 por ciento de los gastos corrientes del Estado, según el gabinete de gobierno. Ese mismo día, el presidente de la gremial municipal, COMURES, Marco Funes, instó a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprobaran la ley del presupuesto.

Un día después, sorprendentemente, los parlamentarios, con 56 votos, aprobaron la emisión de bonos para financiar el presupuesto de 2005. La moción legislativa tuvo el sorpresivo apoyo de dos diputados del FMLN, quienes, al término de sesión, no quisieron comentar su posición. A la larga, el FMLN se quedaba con dos diputados menos, perdiendo así el privilegio de la mayoría calificada. El 20, el jefe de la bancada efemelenista, Schafik Handal, aseguró que en el partido “no hay lugar para traidores”, dando por descontado que la fracción no contaba más con los dos legisladores suyos que votaron en contra de la línea del partido.

La prensa recogió incluso las declaraciones del actual alcalde de Tecoluca, Carlos Cortés, de donde proviene uno de los legisladores que apoyó la emisión de bonos. El edil dijo que aquél “tomó una decisión unilateral en contra de la voluntad de todos los afiliados del departamento de San Vicente”.

El 21, el gabinete económico de Saca se sentó para trazar las perspectivas económicas para 2005. En términos generales, el gobierno perfila un año de oportunidades, apostando a mayores niveles de inversión pública y privada; aumento en el envío de remesas y al incremento en las exportaciones por la ratificación del CAFTA. Como factores adversos, el gobierno señaló el aumento en los precios internacionales del café y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. En el marco de un seminario organizado por la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), disertaron los ministros de Hacienda y Economía, el secretario técnico de la presidencia y la presidenta del Banco Central de Reserva, para presentar sus apreciaciones sobre el particular. Finalmente, el día 26, los legisladores de las fracciones de ARENA, PCN, PDC y CDU, más un disidente del FMLN, aprobaron la Ley del Presupuesto General para 2005, con una asignación de 2,992 millones de dólares, representando un incremento de 198 millones respecto del ejercicio anterior.

En lo que se refiere a aspectos sociales tuvo relevancia el lanzamiento oficial del Plan de Nación por parte del presidente de la República y la focalización en el sector costero de oriente, con el plan de desarrollo del Puerto Cutuco, departamento de La Unión. En paralelo, el gobierno ha tenido que enfrentar una serie de desafíos en los rubros de salud, educación y vivienda. Así, el 13 de enero, a cuatro años de los terremotos de 2001, la prensa revelaba que, de acuerdo al Viceministerio de Vivienda, todavía faltaba reconstruir unas 57,224 casas afectadas por los sismos. De acuerdo a la misma fuente, se habría finalizado la reconstrucción de otras 106,224 unidades habitacionales. *La Prensa Gráfica* reveló que en localidades de Usulután, La Paz, San Vicente, Sonsonate y Ahuachapán, decenas de familias todavía esperaban el acceso a servicios básicos que les fue prometido desde que fueran trasladadas a viviendas que no son suyas.

El 16, el presidente Antonio Saca oficializó el lanzamiento del Plan de Nación, convertido en programa presidencial, en el marco del inicio simbólico de la reconstrucción del Puerto Cutuco, coincidiendo con la celebración oficial de los 13 años de los acuerdos de paz. Los antecedentes de dicho plan se rastrean hasta la administración presidencial de Armando Calderón Sol. Recuérdese que, en 1998, la Comisión Nacional de Desarrollo presentara al ex presidente y al país entero, el documento *Bases para un plan de nación*. Era la primera vez, desde los acuerdos de paz de 1992, que un grupo de salvadoreños notables se sentaba para discutir el estado y el rumbo de la nación. Meses después de ese capítulo, luego de intensas jornadas de consulta en todo el territorio nacional —y coincidiendo con el preludeo del ascenso de Francisco Flores al Ejecutivo—, la Comisión rubricaría *Temas claves para el Plan de Nación*, un compendio de los principales retos de El Salvador de cara a los próximos años.

El documento suscitó un ambiente de debate nacional, pero pronto fue ahogado desde la misma casa de gobierno: Francisco Flores, habiendo sido investido, ignoró el esfuerzo propiciado por su predecesor. Pero Elías Antonio Saca parece haber aprendido la lección: honrando una promesa electoral, apoyó el relanzamiento del Plan de Nación mientras celebraba un nuevo aniversario de los acuerdos de paz, un símbolo muy importante en términos políticos. La noticia es alentadora.

Sin embargo, a juzgar por la limitada atención que Casa Presidencial le ha prestado al asunto y por las actuales prioridades del Ejecutivo, pareciera que la vuelta al Plan obedece más a la insistencia de sus gestores —miembros de la sociedad civil— que a una voluntad expresa del presidente y su equipo de gobierno. A ello se debe, en parte, que el anuncio de la vuelta al Plan de Nación apenas tuviera eco entre los círculos oficiales, como sí lo ha tenido entre algunos sectores de la sociedad civil, que insistentemente han demandado del Ejecutivo una visión de país en los proyectos de desarrollo.

El día 17, el presidente Saca inauguró el año escolar 2005, con la ratificación de nuevos proyectos educativos. La prensa estimó que para este año, el Ministerio de Educación esperaba una matrícula de aproximadamente 1,800 mil alumnos del sistema público, entre parvularia y educación media. “Una gran parte de los esfuerzos estarán focalizados en las escuelas de los 30 municipios con mayores niveles de rezago educativo del país, para atacar el analfabetismo, la deserción escolar, la sobriedad y aumentar los niveles de escolaridad de su población”, dijo el mandatario desde un centro escolar capitalino.

Ese mismo día, el Ministerio de Salud decretó alerta preventiva indefinida debido al repunte de casos de diarrea registrado desde que inició al año y que hasta ese día había cobrado la vida de 8 menores de edad. Según las autoridades sanitarias del país, se habían registrado 3,743 casos más respecto del mismo periodo de 2004. El 31 de enero, la cartera de Salud decretó alerta amarilla en los cinco departamentos más afectados por casos de diarrea infantil, situación que se había cobrado la vida de 13 niños hasta el cierre del mes. La prensa nacional destacó que el 77 por ciento de los que asistieron a consulta por el mal son menores de cinco años. Los departamentos más afectados son Sonsonate, La Libertad, Morazán, Usulután y San Miguel.

Un último asunto al que dio bastante cobertura la prensa nacional fue el de la carrera de Francisco Flores hacia la Secretaría General de la OEA, que aquí se recoge escuetamente. Aunque el ex presidente se había movilizado desde meses antes no fue sino hasta el 13 de enero que el gobierno de El Salvador oficializó, en Washington, la candidatura de su ex presidente, con el respaldo oficial de los presidentes de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

La representación salvadoreña desistió de pedir el apoyo de Honduras, país que ha sostenido desde un principio que Flores no es un candidato de consenso dentro de Centroamérica. El 27, al cierre del mes, la prensa nacional destacó que Flores recibió el respaldo público de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para lograr la Secretaría General de la OEA, luego de que el ex mandatario se dirigiera a los 34 embajadores asistentes. Las fuentes destacaron, además, que Flores era el candidato con más apoyo, arriba de los candidatos mexicano, Ernesto Derbez, y chileno, José Miguel Insulza.

Dentro de los asuntos de relevancia ocurridos durante el mes, es pertinente volver sobre uno en particular, debido a su incidencia en la vida política nacional: la permanente crisis del FMLN. Las deserciones registradas en las filas de diputados efemelenista no es ninguna sorpresa, puesto que se veían venir. Es curioso, por eso, que los más sorprendidos sean los diputados de ARENA, porque ellos las provocaron. El paquete estaba arreglado con anticipación. En la plenaria legislativa en que fueron aprobados los bonos, a última hora, modificaron la agenda del día para introducir el dictamen de la Comisión de Hacienda, que recomendaba aprobar la cobertura del déficit del presupuesto nacional de este año con bonos. Luego votaron con el resultado conocido de antemano y, enseguida, cerraron la sesión plenaria. La prensa formaba parte del arreglo, pues, aun cuando la votación tuvo lugar entrada la noche, colocó la noticia en primera página y, a primera hora de la mañana siguiente, los voceros gubernamentales estaban disponibles para los medios, donde mostraron su falsa sorpresa y se congratularon de lo que habían logrado.

El arreglo pasa por reformas a la legislación electoral, que permiten a los partidos pequeños de la derecha permanecer en el registro oficial, aun cuando no consiguieron el mínimo establecido por la ley, en la última elección. Más aún, las reformas tienen efecto retroactivo, un hecho inaudito en legislación electoral, pues así como permiten la permanencia de estos partidos, también podrían, dado el caso, deslegitimar una elección popular, que no fuera de su conveniencia. Esta reforma era necesaria para contar con los votos de los disidentes demócrata cristianos, quienes, junto con los dos diputados del FMLN, hicieron la mayoría cualificada. Esto significaba que la aprobación del presu-

puesto de este año se reducía a un simple trámite, puesto que sólo se necesita mayoría simple.

Como no podía ser menos, el presidente Saca y los voceros de ARENA se deshicieron en elogios para los dos diputados del FMLN, que votaron a favor. Los consideran valientes y patrióticos. Estos, por su lado, justificaron su deserción alegando su preocupación por los niños hospitalizados, la necesidad del presupuesto y el carácter revolucionario y heroico de su decisión. Valor sí tuvieron, pero lo demás es demagogia. Tuvieron valor, porque aceptaron desmarcarse de la línea oficial de su partido y eso significa la expulsión inmediata. Pero más amor le tuvieron al dinero y a las prebendas, que a los niños y a los enfermos, porque lo más probable es que no hayan podido resistir la oferta de ARENA, partido que, sin duda, les dio una buena cantidad de dinero y les ha prometido cargos gubernamentales que les aseguren un futuro inmediato. Como es natural, todos niegan enfáticamente, pero sin convicción, que haya habido dinero de por medio. Alegar que el voto en contra del FMLN es un acto de rebeldía contra su dirigencia es inconsistente, porque hay muchas otras formas de expresar el rechazo a la dirección del partido.

Los hechos de esta plenaria van más allá de la mera aprobación del presupuesto. La deserción significa también que el FMLN ha perdido mucho terreno, en la Asamblea Legislativa. Con esta deserción, no sólo se derrumba la fuerza de sus demandas actuales al gobierno de ARENA, sino que también las que pueda hacer en el futuro. Es cierto que todavía tiene un voto de ventaja, puesto que uno de los desertores es diputado suplente, pero es evidente que, en caso de necesidad, ARENA tiene poder para comprar ese voto crucial.

La sorpresa causada por la votación en ARENA es falsa, pero en el FMLN es real. Este partido está tan conmocionado que su primera reacción consistió en lanzar acusaciones y epítetos. Acusar a los desertores de traición y buscar similitudes con la pasión de Cristo, no fueron más que desahogos de impotencia y perplejidad. Días antes de la sorpresa, el FMLN pensaba que todavía podía exigirle al presidente Saca sentarse a negociar con él. Ante la debacle que padece, el FMLN acusa a terceros. En concreto, al gobierno de Saca y a ARENA, los cuales, es indudable, son responsables de lo ocurrido. Culpar a otros es fácil, pero no suficiente, pues el FMLN también debe mirar un poco hacia su interior.

Es cierto que no puede destacar vigilantes para cada diputado, alcalde o dirigente del partido; pero algo funciona mal en éste, puesto que uno de los diputados que se vendió era un militante intachable para los parámetros del partido. Más allá de ello, la dirigencia del FMLN debe cuestionarse sobre la forma en que dirige el partido. Cada vez es más evidente que su autoritarismo no puede imponer la disciplina interna, ni mantener la unidad. Los desertores no son sólo simples afiliados, sino militantes. Como sea, el partido de izquierda enfrenta, desde el inicio del año, un ingente reto para recobrar el tiempo y las energías perdidas, sobre todo porque su principal contrincante se halla en franca campaña política para recuperar los bastiones de poder que reclama como suyos.

El mes de febrero iniciaba con las mismas preocupaciones. Por un lado, persistía la crisis en los hospitales de la red pública por los casos de diarrea infantil. Las críticas provendrían de los mismos círculos oficiales. El 4, el director del Hospital de Niños Benjamín Bloom, Carlos Figueroa, criticó al ministro de Salud, Guillermo Maza, debido a la pasividad de este último respecto del repunte de enfermedades gatrointestinales que golpea a la población infantil. De acuerdo con las cifras oficiales, la actual epidemia de diarrea había atacado a 30 mil 503 niños más que el año pasado, causando la muerte de 15 bebés hasta esa fecha, mientras en el mismo periodo de 2004 murieron sólo cinco niños. “Él puede decir lo que quiera, pero no es epidemiólogo”, se justificó el ministro de Salud, restando seriedad a las declaraciones del galeno.

Dos días después, Maza confirmó que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) contribuiría para descongestionar los hospitales de la red pública en la atención a los casos de diarrea. El 8, el ministro de Salud anunció que su cartera disponía de entre cuatro y cinco millones de dólares para invertir en la contratación de 30 pediatras y enfermeras que serían destacados en los Sistemas Básicos de Atención Integral (SIBASI), ubicados en las zonas más afectadas por la epidemia. El 24 de febrero, el Ministerio de Salud confirmó la vigésima muerte de niños víctimas de la diarrea.

Por otro lado, en materia de seguridad pública continuarían las acciones gubernamentales para enfrentar la ola de homicidios con que inició el año. Así, el 3 de febrero, el presidente Antonio Saca reconoció que los crímenes que se habían registrado en las últimas semanas dependían de la

violencia social y no de las pandillas, como se sostuvo por meses, “pero esos mismos problemas los tiene México, los tiene Guatemala y algunos otros países, y han logrado atraer inversión”, justificó el mandatario. Además, junto con representantes del Banco Mundial (BM), el mandatario —mientras inauguraba la conferencia “Mejor clima de inversión para promover el crecimiento y reducir la pobreza”—, señaló que la gran deuda del país es el crecimiento económico, que ha mostrado la tasa más baja en toda la región (1.8 por ciento del PIB) en los últimos dos años. Para la vicepresidenta del BM en América Latina, Pamela Cox, el país requiere de mayor inversión social, reducción de la democracia y eliminar la corrupción, apostarle a la innovación tecnológica, fortalecer las instituciones, aumentar los niveles de seguridad y aplicar de forma eficiente y transparente el marco regulatorio. “El objetivo es generar un clima de inversión que beneficie a todos, no sólo a las grandes empresas”, enfatizó Cox.

El día 7, el Ejecutivo anunció que lanzaría un plan destinado a disminuir los homicidios. El denominado “Plan de protección a la vida” iniciaría en los tres municipios más afectados por ese problema: Colón, Sonsonate y Soyapango. *La Prensa Gráfica* reveló que, en este último, había serias limitaciones para la Policía en personal y equipo. Apenas 659 agentes, señala la nota periodística, laboran en la delegación de ese municipio (promediando un agente para 1,553 habitantes), teniendo que brindar seguridad también en Ilopango y San Martín, municipios próximos.

Paralelamente, autoridades de centros penales trasladaron a 17 cabecillas de las maras Salvatrucha y 18 hacia dos centros del oriente país, para recluirlos, finalmente, en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, como parte del plan antihomicidios anunciado por el Ejecutivo. El argumento de las autoridades consiste en que los pandilleros planean, desde sus celdas, asesinatos y toda clase de fechorías. La procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó como “superficial y poco serio” el plan gubernamental. “Por qué no pedimos mejor un refuerzo presupuestario para que la Fiscalía aprenda a investigar y la Policía pueda recoger pruebas para cada caso”, dijo la funcionaria.

Un día después, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) anunció públicamente su respaldo al plan gubernamental. “Aplaudimos

la iniciativa, y nosotros, al igual que lo hemos hecho en años anteriores en el combate a los secuestradores y al contrabando, pondremos a disposición a nuestros abogados para llevar ante la justicia a los criminales”, aseguró el presidente de la gremial, Federico Colorado. El 12, la Policía dio a conocer una lista de nombres con fotografías de las 19 personas más buscadas por delitos como homicidio y violación.

El 13, los reos protagonizaron hechos violentos en el penal de Chalatenango y una protesta masiva en el de Cojutepeque, en respuesta al traslado de 17 jefes de maras hacia el penal de máxima seguridad. En el primero de los hechos, un reo fue lesionado gravemente de bala por uno de los custodios. Posteriormente, el interno falleció sin que la prensa o las autoridades dieran mayores detalles. Los familiares de los internos se negaron a dejar las instalaciones de los centros de detención. Al día siguiente, tras 28 horas de ocupación, los familiares de los reos abandonan los penales de Chalatenango y Cojutepeque. Las autoridades no cedieron a las demandas de los internos. El 16, un rotativo nacional reveló que el director de la Policía, Ricardo Meneses, habría culpado al viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, por la confusión en los datos de tres ciudadanos que fueron incluidos en la lista de los homicidas que divulgó el cuerpo policial días antes. “La Policía no les ha hecho ningún daño, habría que preguntarle al señor viceministro cómo está manejando esta situación, porque él es el encargado de ese plan y habría que ver quién dio esa información, pero no he sido yo”, dijo Meneses. Al siguiente día, la viceministra de Gobernación, Silvia Aguilar, confirmó que dentro de la Policía se haría una investigación para determinar los responsables de esa confusión.

El día 21, el presidente Saca aseguró que había un vínculo entre las pandillas centroamericanas y grupos terroristas islámicos. Días después, el 24, la Policía salvadoreña realizó, por la madrugada, una redada en la que se detuvo a 36 miembros de pandillas, acusados de homicidio, violación, robo y otros delitos. En el operativo participaron como observadores agentes del FBI y periodistas norteamericanos. Horas después, 43 legisladores levantaron sus manos para aprobar una serie de reformas a la Ley de Armas, ignorando muchas de las propuestas planteadas por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, el director general de Centros Penales,

Ástor Escalante, anunciaba cambios drásticos en el régimen de visitas de los internos, como medida de presión debido a las acciones de protesta registradas en casi todos los centros de detención. El 27, se registraron nuevos desórdenes en cinco centros penales del país.

También, durante febrero, trascendió ante la prensa un nuevo capítulo de división en el seno del FMLN. El 9, la prensa nacional dio a conocer una nueva pugna, esta vez por la postura de los llamados reformistas y los ortodoxos respecto de las primarias como mecanismo de elección de los candidatos. Los ortodoxos, de acuerdo con la nota, habían propuesto eliminar ese mecanismo, mientras los reformistas se anclaban al mismo, bajo el argumento de que les diferenciaba del resto de partidos políticos. “De lo que se trata es de que el consejo nacional entreviste a los aspirantes a legisladores porque no se tienen que desviar cuando ya estén en el primer órgano del Estado”, dijo el legislador efemelenista Humberto Centeno. “No estamos de acuerdo en que se eliminen las primarias porque ello se interpretaría como una medida de exclusión”, argumentó la diputada Celina de Monterrosa.

Como sea, es pertinente volver sobre el hecho de la parcialidad de la prensa a la hora de abordar los conflictos internos de los dos partidos políticos más importantes del país. Los medios de prensa y los analistas gustan recalcar las divisiones y divergencias internas de los partidos políticos de oposición, especialmente los de tendencia de izquierda. Pocas veces, en cambio, se toman el tiempo para analizar las luchas de poder dentro del partido oficial. En los casos extremos en los que no se pueden ocultar las diferencias internas, las suelen presentar como esfuerzos genuinos tendientes a resolver los problemas del país.

Un ejemplo palmario lo constituyen los movimientos internos en cuanto a la designación del candidato a la presidencia por el partido de derecha en las elecciones de marzo de 2004. Mientras se presentaba la situación interna de la izquierda como una lucha a muerte entre hermanos enemigos, en ARENA, Elías Antonio Saca ya contaba con el apoyo de los medios de prensa más influyentes que presentaban lo suyo como una estrategia noble para ganarse la confianza de los militantes areneros.

Se podrá sostener que los estrategas del partido oficial han sabido manejar mejor sus discrepancias

internas y que se han cuidado de ventilar sus problemas en público; o, desde otra vertiente, se puede hablar de las precauciones “naturales” que toman los periodistas y los medios cuando se trata de contar las costillas del partido oficial. Pero, lo que no se puede negar es que también hay una lucha a muerte por el poder en el partido de derecha, por mucho que se disfrace de buenas intenciones. Lo más preocupante es que la lucha por el control de los pasillos del poder en ARENA suele tener repercusiones más graves que lo que sucede en las demás organizaciones políticas. Porque quien se atreve a desafiar los poderes fácticos que operan en ese partido se arriesga no sólo a la marginación política, sino también a represalias económicas o a ir la cárcel, en el peor de los casos.

En esta realidad hay que buscar la respuesta a preguntas tales como: ¿por qué en ARENA todo parece armonía y paz interna?; o, ¿por qué no son ventilados en la prensa los desacuerdos internos en el partido oficial? Lo que sucede en el fondo es que los miembros de esta agrupación política se han aprendido bien el código del manejo del poder. Se sabe que quien lo detenta, una vez que se mantenga en sintonía con los intereses más importantes, los empresarios más acaudalados representantes del sector financiero, tienen la potestad de hacer y deshacer a su voluntad.

Esta concepción patrimonialista del Estado explica el hecho de que los descontentos internos no salgan a flote. También significa que los dirigentes políticos son tan verticalistas y autoritarios o más que los del FMLN, por mucho que algunos de ellos se dediquen a señalar con dedo acusatorio las actuaciones de la cúpula de este último partido. La diferencia está en el hecho de que quien no se deja dominar por los dirigentes del partido de izquierda, aparte de su carrera política, no arriesga muchas más cosas. Al contrario, cuando se comportan en la línea marcada por la derecha, tienen más posibilidad de mejorar su estatus económico y de ascender en la pirámide social salvadoreña.

La razón por la que el proceso de selección de candidatos del partido oficial para las próximas elecciones no ha ido más allá de algunas murmuraciones poco audibles se debe a esta realidad anteriormente explicada. Así, Saca ha podido, desde su llegada a la presidencia, diseñar una organización a su medida, en la que sus amigos y allegados ocupen los espacios más destacados. De esta manera, con bastante seguridad de obtener buenos resul-

tados en las próximas elecciones, el presidente confeccionará un partido a su medida. Así, estará reforzando su propio poder en el país y en ARENA.

Es necesario mencionar este tema porque el caso Saca no tiene parangón si se compara con los tres presidentes anteriores. Saca busca controlar los destinos de su partido y los del país al mismo tiempo. Mientras que sus antecesores tenían que lidiar con ciertos políticos de trayectoria que habían ganado su posición a partir del sacrificio personal, Elías Antonio Saca, en cambio, tendrá una generación de diputados y de alcaldes, devotos en su mayoría a su persona porque le deberán su carrera política.

Flores conoció una situación muy diferente. Mientras su partido languidecía en las encuestas, voces importantes en el seno del mismo y de la sociedad, en general, cuestionaban su liderazgo y su poca capacidad para el diálogo. Saca, en cambio, sigue adelante en los sondeos de opinión y se encamina a tener a sus pies a los miembros de ARENA. Si las cosas siguen igual, Saca podría llegar a convertirse en un nuevo caudillo de la derecha. Al mejor estilo de los presidentes mejicanos durante la “dictadura perfecta”, tendrá la potestad de designar a su sucesor, un privilegio raro con que no contó ni siquiera el arrogante Flores.

En definitiva, es pertinente volver sobre el clima de violencia que campea entre los salvadoreños, las propuestas gubernamentales para enfrentar dicha situación y, como complemento, la crisis que padece el sistema penitenciario del país. Sobre los primeros asuntos hay algunos hechos curiosos. Según el periódico digital *El Faro*, Saca había manifestado lo siguiente, a inicios del año: “imagínense qué le hubiera pasado a este país si los cuatro mil malacates y delincuentes estuvieran sueltos, cuántos homicidios se han evitado”. Su defensa del Plan Súper mano dura era necia, a pesar de los indicadores de violencia. Pero a inicios de febrero, el mandatario aceptó públicamente que no eran las maras el principal detonante de los crímenes, sino la denominada violencia social. No por ello aceptó el fracaso de su plan estrella —y es probable que nunca lo haga—.

La misma fuente periodística había denunciado algunas incongruencias: “las cifras del director policial no coinciden —se lee en *El Faro*—, pues él mismo [el director de la Policía, Ricardo Meneses] asegura que a lo largo de 2004 se perpetraron 847

homicidios relacionados con las pandillas, pero al mismo tiempo la Policía mantiene que la cifra total de homicidios en ese período ascendió a 2 mil 765. Por simples cálculos matemáticos, se tiene entonces que de ese total, sólo el 30.6 por ciento corresponde a las maras, casi 20 puntos porcentuales lejos de llegar a ser así la mayoría de los casos". Aún así, desde el Ejecutivo se mantuvo la mentira por más de un año, lo cual le granjeó gran respaldo electoral al partido ARENA.

Pero del cambio de discurso no se ha seguido un cambio en las prácticas. Como parte de su plan antihomicidios —que habrá que ver si no se trata de un simple refrito del fracasado Súper mano dura—, el Ejecutivo giró instrucciones para trasladar, desde diversos centros de detención, a los que considera cabecillas de los pandilleros hacia el penal de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca. La tesis del gobierno es que desde los centros penales los pandilleros planean los homicidios que se cometen en El Salvador. Desarticulando esa red —razonaron los asesores de seguridad del Ejecutivo— seguramente disminuirán los homicidios. Pero nuevamente se cae en el mismo vicio de culpar a los pandilleros.

Ante la sorpresiva medida, los penales de Cojutepeque y Chalatenango fueron escenarios de una protesta en la que los reos y sus familiares, incluidos varios menores de edad, tomaron las instalaciones para exigir que los 17 presos pandilleros fueran trasladados de nuevo a las antiguas cárceles. El presidente Antonio Saca advirtió que “no negociará con los delincuentes”. Diversos sectores cuestionaron la legalidad del traslado. La medida gubernamental revive la última tragedia registrada en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, donde en agosto pasado murieron 31 internos en el marco de una riña que llevó a la destitución y posterior seguimiento judicial del director de ese centro penal. El director general también renunció, aduciendo motivos personales.

Una de las medidas paralelas para disminuir los índices de homicidios en El Salvador es la propuesta del Ejecutivo para reformar la actual Ley de Armas, Municiones y Explosivos. Según la organización *Sociedad sin violencia*, “la discusión pública se centraba en tres aspectos clave: la prohibición de la portación o no en los espacios públicos (calles, parques, instituciones públicas y centros sociales, etcétera) y lugares con acceso público (bares, restaurantes, centros comerciales,

eventos deportivos, etcétera); el incremento de la edad mínima para portar un arma a los 25 años (actualmente está en 18 y 21, según el tipo de matrícula); y el número de armas que debería poseer una persona”.

Con todo, la propuesta gubernamental se quedaba corta: “no prohíbe la portación de armas en los espacios públicos y sólo amplía los lugares donde se impide portar armas, básicamente al transporte colectivo; aboga por aumentar a 25 años la edad mínima; impide la publicidad del comercio de armas y establece un máximo de dos armas las que una persona podría adquirir cada año, entre otras medidas”. Entrevistado por el rotativo *La Prensa Gráfica*, el ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, sugirió que el principal opositor de restringir la portación de armas de fuego en espacios públicos ha sido el mismo viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, quien defiende los intereses de la Asociación Nacional de Tiro “que ha sostenido que se va a perjudicar el deporte”.

La propuesta del Grupo *Sociedad sin Violencia*, empero, pretende ir más allá; en efecto, propone “prohibir la portación de armas en todos los espacios públicos del país, lugar donde se comenten la mayoría de delitos; aumentar a 25 años la edad mínima para tener un arma y limitar la tenencia a una sola arma por persona”, de acuerdo al boletín que publica electrónicamente ese organismo. Dicho grupo cita el informe *Armas de fuego y violencia*, mismo que estima que circulan “más de 450 000 armas de fuego, la mayoría ilegales”. En 2004 —prosigue la fuente—, “se cometieron más de 2,700 homicidios, el número más alto de los últimos cinco años, más del 74 por ciento con armas de fuego, según datos del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. Esto es, más de seis personas son asesinadas cada día en El Salvador con un arma. Asimismo, más del 50 por ciento de los delitos se cometen con un arma de fuego legalizada”. De hecho, uno de los cometidos del grupo es desterrar la creencia de que la portación de armas brinda mayor seguridad a su dueño.

Pero los legisladores pasaron por alto incluso la permisiva propuesta del Ejecutivo. Este último, mediante la cartera de Gobernación, planteaba una reforma a la actual Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones y Explosivos para que se limite la portación de armas en los espacios públicos —básicamente en autobuses—, incrementar la

edad mínima para obtener una licencia — fijándola en 25 años cuando lo permitido es 21 — y limitar a dos armas adquiridas por una persona anualmente. El gobierno salvadoreño propuso, además, reformar el Código Penal para que se aplicaran sanciones a quienes transgredieran las anteriores modificaciones. En el artículo modificado (346-b) penaría con prisión de tres a cinco años a “los que portaren armas de fuego sin el permiso respectivo. La misma pena se aplicaría para el que la portare en espacios públicos, en estado de ebriedad o que se la entregare a un menor de edad o incapaces”.

En el marco de la discusión legislativa de la propuesta, las diferentes fracciones partidarias manifestaron sus posiciones. Para el caso, la bancada oficialista, siempre plegada a las iniciativas del Ejecutivo, apoyó la totalidad de la propuesta, aunque al final cedió ante la presión del PCN. “Esto es necesario y urgente. Ya que el problema de la violencia y del homicidio está afectando al país”, aseguró el legislador Guillermo Gallegos, de ARENA. Este partido cuenta con veintinueve votos. Otra fracción, la del PCN, con catorce votos, siempre ha defendido los intereses de quienes comercializan con armas en el país, por lo que discrepa en la ampliación de la edad mínima para portar armas. Así, ese partido apoyó la propuesta del Ejecutivo siempre y cuando se mantuviera en veintiún años el mínimo para extender la licencia de posesión de armas. “No se puede elevar a 25 años para obtener la licencia porque no habría igualdad. Los agentes de la PNC pueden andar armas antes de los veintiún años”, expresó el diputado pecenista Elizardo González Lovo, quien ya ha sido pillado disparando sin causa aparente al muro de una escuela frente a su residencia en La Unión.

La fracción de ARENA no necesitó argumentar su posición: su apoyo a la propuesta del Ejecutivo se da por descontado, sin meditaciones ni exámenes de conciencia. El argumento del PCN — si es el mismo que el de González Lovo — es ridículo, pues se trata de limitar la portación de armas en la población civil y no en los elementos de la Policía, quienes frecuentemente se ven en situaciones embarazosas frente a delincuentes armados hasta los dientes. Simplemente, la argumentación del diputado de marras cayó por su inconsistencia. Aún así, ARENA y el PCN sumaron sus 43 votos, justo los necesarios para aprobar las enmiendas.

¿Cuál fue la posición del resto de fracciones legislativas, aunque, por aritmética, quedaran al

margen en esta discusión? El FMLN propuso la prohibición total a la portación de armas de cualquier tipo, restringiendo solamente a los cuerpos de seguridad. Para Manuel Melgar, diputado efemelenista y vicepresidente del Parlamento, “las propuestas que han presentado, y que son respaldadas por ARENA, son mediocres: no van al problema. La portación de armas se debe eliminar”. De hecho, el FMLN, desde que entregó sus armas en 1991 y firmó la paz con el gobierno de Alfredo Cristiani, se ha pronunciado por el desarme total de la sociedad civil. Melgar añadió que la propuesta “es una medida para aparentar que quieren combatir la delincuencia. Hacen publicidad con algo que no llega al fondo del problema”. El resto de fracciones, la del PDC y CDU, no manifestaron una posición definida o no fueron consultadas por la prensa.

Como quiera que sea, el FMLN coincidió en gran medida con lo que la sociedad civil organizada ha venido diciendo desde hace años y con la misma Policía Nacional Civil, institución que, desentonando curiosamente con el estribillo oficial, ha defendido el desarme de la sociedad. En este escenario, la propuesta más consistente proviene de la organización *Sociedad sin violencia*, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador. Los representantes de dicha iniciativa celebraron el hecho de que el gobierno salvadoreño tomara cartas en el asunto ante los preocupantes números de la violencia social, pero discrepan allí donde el FMLN señala es “el fondo del problema”.

En el sitio de Internet de dicha organización se lee que “esta iniciativa de la ciudadanía [...] busca, entre otras propuestas, prohibir la portación de armas en todos los espacios públicos del país, lugar donde se comenten la mayoría de delitos; aumentar a 25 años la edad mínima para tener un arma y limitar la tenencia a una sola arma por persona”. “Sociedad sin Violencia”, pues, extiende la prohibición a todos los espacios públicos (calles, parques, instituciones públicas y centros sociales, etcétera) y lugares con acceso público (bares, restaurantes, centros comerciales, eventos deportivos, etcétera).

La limitación a portar armas únicamente en los autobuses — la propuesta del Ejecutivo — es absurda. Hay suficientes indicios para sospechar que la iniciativa gubernamental — pese a responder a una amenaza real de los salvadoreños y aparecer en un momento en que se hace necesaria — no responde necesariamente a los intereses de la socie-

dad civil. Aún más, los argumentos sobre la que se sustenta la apartan del interés fundamental de la discusión, o sea, del intento por disminuir los homicidios que ocurren en el país. Según lo reconoce el gobierno, durante 2004 —cuando se producían entre seis y siete casos diarios—, se cometieron 2,762 homicidios en todo el país; en 2,055 de los casos hubo de por medio armas de fuego, es decir, cerca del 75 por ciento.

En el marco de la discusión abundaron declaraciones desafortunadas o tendenciosas como la del presidente del Club Salvadoreño de tiro, Julio González Suvillaga, quien se opuso a la medida porque se daría ventaja a los delincuentes, quienes “no registran sus armas, las compran en el mercado negro”. Suvillaga aboga por quienes quieren aprender a disparar un arma en una sociedad como la salvadoreña, como si se tratara de aprender a conducir un automóvil: “La ley no habla de licencias de aprendizaje. Si usted le entrega un arma a un menor de edad, estaría cometiendo un delito, entonces, ¿cuándo se le enseñará?”, dijo el dirigente a un periodista de *El Diario de Hoy*.

Como sea, esta opinión no difiere en lo sustancial de la del mismo presidente de la República, del viceministro de Seguridad, Rodrigo Ávila, ni de quienes se esconden detrás de la iniciativa llamada “Ciudadanos preocupados por el desarme de la población honrada”, una especie de grupo fantasma, de las que aparecen ante la opinión pública cada vez que se discuten temas de interés nacional.

Los funcionarios de ARENA deberían tener más cuidado cuando opinan sobre asuntos de interés público. A nadie le gusta que le lancen acusaciones sin pruebas. Tampoco es prudente demonizar a un partido, a su institucionalidad y a sus bases, mediante mentiras, difamaciones y calumnias. René Figueroa —el actual ministro de Gobernación, vicepresidente de ideología del partido en el gobierno y jefe de campaña del presidente de la República, cuando era candidato—, ha recaído nuevamente en una vieja manía de los areneros más radicales. Acusó a diputados del FMLN de estar detrás de los desórdenes registrados en varios centros penales del país; antes, había dicho que pandilleros de la Mara 18 y MS asistían a reuniones del partido de izquierda, en las que habrían recibido lineamientos para desestabilizar el país. Sin pruebas en mano, el ministro lanzó sus ataques verbales, mientras su partido afina la estrategia en vistas de los comicios legislativos y municipales de 2006.

Tal actitud no es nueva, al menos entre las filas areneras. El predecesor de Figueroa en el cargo, el ex ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, utilizó la misma estrategia, durante la pasada administración presidencial. Recuérdese que Oertel, en ese momento vicepresidente de ideología de ARENA, era el encargado de “hacer el trabajo sucio”. Su figura y su imagen —prototipo del hombre de derecha al mejor estilo de los fundadores de su partido— contribuyeron a una estrategia de manipulación de la opinión pública. Sus magros comentarios circularon en el marco de una administración igualmente intolerante y arrogante: la de Francisco Flores.

Pero las desafortunadas declaraciones de Figueroa se dan en momentos en que su jefe, el presidente Antonio Saca, procura aparecer con la cara más amigable de la política criolla salvadoreña. Apartado del viejo estereotipo arenero, Saca es la viva imagen del político bonachón, cercano a la gente y dispuesto a escuchar y recibir a todos los salvadoreños en su despacho de Casa Presidencial. Su apertura hacia la prensa y la constante campaña de información de sus logros es parte de una estrategia de posicionamiento de su gestión entre la población, misma que le ha resultado, si se toman en cuenta los altos niveles de aceptación de que goza.

Pese a sus yerros, Saca ha perfilado una imagen exitosa de su gobierno, que ha dejado malparado a un FMLN que no termina de encontrar su identidad ante las constantes muestras de divisionismo. Al respecto, el mismo Figueroa se ha atrevido a decir que el repunte de homicidios registrado desde finales del año pasado se debe al debate interno que ha desangrado al partido de izquierda.

En el sentido expuesto, la figura de Figueroa —quien pese a ser instruido al inicio de su gestión para que se mostrase más abierto con sus contrincantes políticos— desentona con el discurso oficial que emana de la casa de gobierno. Sus declaraciones —que ahora son vistas con mayor ojo crítico por la población— podrían acarrearle un efecto contrario al que desean para sus intereses partidarios.

Desde hace algunos años, se ha dicho arriba, desde las estructuras del gobierno de ARENA han sobresalido algunas figuras públicas —poco agradables, usualmente prepotentes y detentando altas cuotas de poder, lo cual garantiza la impunidad— encargadas de hacer el trabajo sucio para el parti-

do que les llevó hasta donde están. Dentro de esas figuras se cuentan, al menos desde la última administración presidencial, el mismo Acosta Oertel, el diputado Norman Quijano y el actual ministro de Gobernación.

Quijano, por ejemplo, ha sido uno de los funcionarios más críticos de las administraciones municipales de San Salvador, especialmente la de Héctor Silva. Sus ataques en contra del proyecto de desechos sólidos de Nejapa, obra de los alcaldes efemelenistas, es muestra de ello. Ahora se sabe que Quijano, quien fungiera como gerente general de acción social durante la gestión edilicia de Armando Calderón Sol, es uno de los principales precandidatos para disputarse la alcaldía capitalina, en marzo de 2006.

Pero el mismo presidente de la República, como era de esperarse ante las presiones al interior de su partido, ha movido sus piezas en la actual estrategia arenera. Antonio Saca ha vinculado a las pandillas con organizaciones terroristas islámicas, pese a que en el reciente encuentro de Policías del área centroamericana, el FBI estadounidense —uno de los principales participantes del cónclave policial— descartó cualquier hecho que base la relación entre terroristas de Al Qaeda y los pandilleros salvadoreños o centroamericanos, a quienes tilda como simples “desadaptados”.

No conforme con ello, el mandatario se congratuló de un nuevo “show” policial ante cámaras de cadenas norteamericanas, para mostrar la “efectividad” de la policía local ante el accionar de las pandillas. El operativo era innecesario, pero oportuno para promocionar a la Policía ante sus similares internacionales. En el “show” se dejaron escuchar halagos y congratulaciones de parte de los jefes policiales salvadoreños.

En resumidas cuentas, las embestidas verbales de Figueroa, las declaraciones sin fundamento del mandatario y el nuevo espectáculo policial han sido parte de la estrategia de un partido que, sirviéndose de los dominios estatales que controla, quiere posicionarse en los espacios que todavía resguarda la oposición, especialmente el FMLN. No es un secreto que los areneros quieren recuperar, a toda costa, la mayoría legislativa que una vez tuvieron, para no tener que negociar con el FMLN y el resto de la oposición. Tampoco hay duda de que quiere recuperar el principal bastión municipal de país, San Salvador, para ubicarse, con

todas las de la ley, como la primera fuerza política del país y hegemonizar la política nacional.

La estrategia de ARENA es irresponsable y se alimenta de una doble moral: mientras el presidente y algunos funcionarios aparecen como el paradigma de la nueva política, otros hacen el trabajo sucio para los intereses del partido. Además, genera el oportunismo político y empobrece aún más la cultura política de los salvadoreños. El FMLN, el principal blanco de las acusaciones, poco puede hacer ante la embestida gubernamental y partidaria. Los medios de comunicación también han jugado un papel poco relevante ante la arremetida, sirviendo, salvo pocas excepciones, de simples voceros de los funcionarios de marras. Gozando del poder que tienen, no han pedido cuentas a esos funcionarios ni han facilitado canales de expresión a la sociedad civil.

Tampoco es nada nueva la resistencia a iniciativas de la sociedad civil de parte de los sucesivos gobiernos de ARENA. Por ejemplo, a estas alturas, se sabe bastante acerca de la violencia que sacude a El Salvador. Los aportes de la UCA han sido cruciales no sólo para entender los factores que la posibilitan, sus distintos agentes y sus variadas manifestaciones, sino también para hacer del problema un asunto de interés público. Antes de 1997 —cuando en la UCA se hicieron los primeros estudios sistemáticos sobre la violencia—, ni siquiera la expresión “violencia social” tenía carta de ciudadanía en las preocupaciones en torno al problema de la violencia en la postguerra. En ese entonces, al gobierno de Armando Calderón Sol le cayeron como un baldazo de agua fría los datos recabados y divulgados por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) y el Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la UCA, a propósito de la magnitud y costos de la violencia en El Salvador.

Al entonces mandatario no le hicieron gracia unos datos que ponían en tela de juicio la imagen del país que su gobierno quería promocionar en el extranjero, esto es, un país pacífico, tranquilo y amigable. Al final de su mandato, Calderón Sol se vio obligado a reconocer que el problema de la violencia no podía obviarse y que, en consecuencia, desde el gobierno tenía que diseñarse una serie de medidas para hacerle frente. Esta convicción fue uno de los legados de la administración de Calderón Sol a la de Francisco Flores y de esta última a la de Elías Antonio Saca. Junto con esa convicción,

también se gestó una interpretación —insinuada en el último tramo del mandato de Calderón Sol y convertida en dogma de fe con Flores y Saca—, según la cual la violencia de la postguerra tenía su origen fundamental en las acciones de las pandillas juveniles, conocidas como “maras”. En virtud de esta interpretación, a todas luces equivocada, las maras terminaron por convertirse en los principales agentes de los más diversos tipos de violencia y, por ello, en las principales destinatarias de los políticas estatales encaminadas a erradicar el crimen en la sociedad salvadoreña.

Que los gobiernos de ARENA reconocieran que la violencia era una realidad en el país fue positivo. También lo fue que aceptaran que desde el Estado se debían implementar políticas orientadas específicamente a enfrentarla. En lo que se equivocaron fue en el diagnóstico de la violencia, en las variadas raíces y expresiones de la misma. Es curioso, pero a medida que los estudios sobre la violencia se fueron ampliando —estudios sobre las maras, sobre la violencia infantil, intrafamiliar y contra la mujer, etc.—, los gobiernos de ARENA centraron obstinadamente su atención en las maras como causa fundamental de la violencia.

Una y otra vez, los estudios sobre violencia han insistido en que la misma tiene múltiples dimensiones y que las maras constituyen apenas una de ellas. Los gobiernos de ARENA —sobre todo, el del presidente Saca y el de su antecesor— han subestimado esa tesis. También han subestimado datos concluyentes acerca de la relativa baja contribución de las maras al total de crímenes cometidos en El Salvador. O datos que revelan la existencia de un mundo del crimen —secuestradores, narcotraficantes, traficantes de armas, tratantes de blancas, contrabandistas de vehículos, etc.—, cuyos agentes principales y beneficiarios directos no tienen nada que ver con las maras y sí con “respectables” hombres de influencia económica y política. Nada de esto importó al gobierno de Flores y, en la actualidad, al gobierno de Saca; coherentes con su diagnóstico, lanzaron sus planes “Mano dura” —el primero— y “Súper mano dura” —el segundo—, orientados a reprimir a las maras, en el supuesto de que disminuida la presencia de los pandilleros en las calles, por la vía del encarcelamiento, la violencia social iba a disminuir en igual medida.

Los estudios y análisis que se hicieron, tanto a propósito del plan “Mano dura” como del plan “Súper mano dura” —además de llamar la aten-

ción sobre sus consecuencias negativas en los planos jurídico y del respeto a los derechos humanos— anticiparon su fracaso más estrepitoso. Sin embargo, en el gobierno —donde parece brillar por su ausencia la sensatez y el uso de la razón— se siguió insistiendo en que en la implementación de esos planes estaba la clave de la tranquilidad de los salvadoreños. Dicho y hecho, cuando estaba por dejar el cargo, Flores dio la orden para iniciar la persecución contra las maras; Saca, tras los pasos de su predecesor, continuó con esa persecución.

El gobierno del presidente Saca —al igual que el de Flores— ha cumplido con una parte de su propósito: además de demonizar a los pandilleros, los han hostigado, acosado, maltratado y encarcelado. Pero, pese a ello, no ha cumplido con su promesa de erradicar la violencia y el crimen. Y no lo ha hecho, porque el diagnóstico que ha fundamentado sus decisiones —al igual que sucedió con Flores— ha sido equivocado.

¿Por qué el gobierno no prestó atención a estudios más completos sobre la violencia, de modo que sus decisiones fueran más integrales? ¿Por incapacidad para entender esos estudios? ¿Por falta de tiempo, dado que había tareas urgentes que atender y que no podían esperar más? ¿O fue porque no había un interés real por enfrentar el problema de la violencia? ¿O acaso fue porque la violencia es un negocio que conviene a sectores poderosos que se lucran con ella? ¿O fue porque la violencia es un tema que puede ser explotado políticamente a conveniencia de ARENA?

Esas y otras preguntas salen a relucir una vez que es claro que el gobierno de Saca —lo mismo que el de Flores— está fracasando en su lucha contra el crimen. Los funcionarios más viscerales podrán seguir clamando por un endurecimiento mayor del combate contra las maras, pero eso lo único que prueba es que su insensatez no tiene remedio. Dentro del combate de la violencia, prohibir totalmente la portación de armas de fuego en espacios públicos no es la panacea para contrarrestar los altos índices de violencia, pues no controla ni el mercado negro ni lo que civiles puedan hacer con sus armas mientras las conserven en sus hogares —lo que las autoridades llaman “tenencia y conducción”—, pero es un paso importante y necesario para educar a una sociedad que no ha renunciado todavía a la violencia como mecanismo privilegiado para dirimir sus diferencias.